

Venezuela, Brasil y Argentina. Apuntes sobre hegemonía, acumulación e integración en la fase de ascenso del proceso popular

Gastón Ángel Varesi*

Introducción

América Latina viene atravesando el proceso de integración regional más vigoroso desde las gestas independentistas. Escenarios que antaño se caracterizaban por la fragmentación, la desconfianza y la confrontación, dieron lugar a un creciente entrelazamiento político y económico que permite ver en la integración una base indispensable para el propio despliegue de los proyectos de gobierno a nivel nacional. Múltiples iniciativas e instancias institucionales, como MERCOSUR, ALBA, UNASUR y CELAC¹, se promueven y articulan de forma compleja, presentando complementariedades pero también tensiones, contradicciones y solapamientos, con alcances potentes pero también difusos. Venezuela, Brasil y Argentina comenzaron a encabezar este proceso de integración como parte de un mismo bloque regional, bajo los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner y que tuvo un hito clave en el rechazo al ALCA en 2005. Sin embargo, las distintas realidades nacionales, atravesadas por los proyectos de gobierno que se despliegan en el marco de singulares relaciones de fuerzas sociales y políticas, expresaron convergencias y divergencias que luego incidieron en el escenario regional, tanto en las estrategias de integración como en los dispositivos institucionales que se impulsaron. El presente trabajo se propone como objetivo aportar a la comprensión de la dinámica compleja del proceso de integración regional en su fase de ascenso popular partiendo de

* Sociólogo, Magíster y Doctor en Ciencias Sociales. Profesor en el Doctorado en Ciencias Sociales y la Maestría en Políticas de Desarrollo en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Coordinador de la sede platense del Centro de Estudios y Formación Marxista H. Agosti (CEFMA).

¹ MERCOSUR: Mercado Común del Sur; ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América; UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas; CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas.

un análisis comparativo de tres casos nacionales de Venezuela, Brasil y Argentina en materia de política pública y construcción de sujetos colectivos, tomando los ejes de hegemonía y acumulación.

El concepto de *hegemonía* remite (ya en su antecedente leninista) a la dirección política, que en Gramsci es también dirección ideológico-cultural de un grupo social sobre otros. La hegemonía es una relación social que atraviesa distintas dimensiones: parte de una base material ligada a la posición de las clases en la estructura, y se realiza en las superestructuras, a través de una *concepción del mundo* que encarna la visión general y expresa los intereses del grupo dirigente y, en su momento más desarrollado, funda un tipo particular de *Estado* (Gramsci, 2003; 2008). En los procesos de construcción hegemónica, «el Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo; pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías ‘nacionales’» (Gramsci, 2003: 58). Así, el *Estado*, como señala Poulantzas (1981), sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica, reviste una *autonomía relativa*, en tanto asegura el interés político general del conjunto del bloque en el poder, organizando el «equilibrio inestable de compromisos» (Gramsci) entre las distintas fracciones al tiempo que organiza esta hegemonía igualmente respecto de las clases subalternas.

A su vez, la política pública incide en la dinámica del proceso de acumulación de capital, en tanto el Estado cumple un rol importante en la orientación económica global, estableciendo «reglas de juego» y gestionando parte del excedente, aportando a la configuración de un modelo de acumulación. Analizamos al modelo de acumulación² a partir de tres núcleos fundamentales: las variables económicas, las políticas económicas y las fracciones de clase, observando relaciones de regularidad y orden de prelación (de jerarquía explicativa) y viendo cómo la interacción de estos tres núcleos definen los rasgos que cobra el modelo. Entendemos que un modelo de acumulación es la forma que adquiere el proceso de *reproducción ampliada del capital* (Marx, 2007) en un espacio y tiempo determinado en el cual se observan relaciones de regularidad

² Para la definición conceptual del modelo de acumulación, tomamos como antecedentes la propuesta de Torrado (1992) y la definición que da Basualdo (2007) sobre el régimen de acumulación. Ver Varesi (2010).

y prelación tanto de las variables económicas como en las relaciones principales que se expresan también en las políticas y entre las clases sociales.

Como señala Poulantzas, «las clases sociales no existen sino en la lucha de clases, con dimensión histórica y dinámica. La constitución de las clases, de las fracciones, de las capas, de las categorías, no puede hacerse más que tomando en cuenta esta perspectiva histórica de la lucha de clases» (1981: 27). Es por esto que realizar un análisis de clases implica, siguiendo a Gramsci (2003), estudiar las distintas dimensiones de las relaciones de fuerzas. Una primera dimensión remite a las *relaciones de fuerzas sociales*, estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, analizando los grupos sociales en relación con el desarrollo de las fuerzas materiales de producción, viendo la función y posición que ocupan en la producción misma. El segundo nivel señalado por Gramsci refiere a las *relaciones de fuerzas políticas*, percibidas a través de su grado de homogeneidad, conciencia política colectiva y organización, y poseen distintas gradaciones: un grado económico-corporativo, basado en una solidaridad que se limita al grupo profesional; un grado más avanzado de conciencia y solidaridad que se extiende a todo el grupo social, pero aún en el plano netamente económico; y un grado superior, estrictamente político ligado a la construcción de hegemonía y la fundación del Estado. Asimismo, Gramsci señala la importancia de las *relaciones de fuerzas militares*, que suelen tener un carácter decisivo cuando se ponen en juego³. Estas dimensiones de las relaciones de fuerzas se encuentran enmarcadas y atravesadas por las *relaciones de fuerzas internacionales*, convocándonos a pensar las grandes potencias, los agrupamientos de Estados en distintos bloques o sistemas hegemónicos y a indagar las relaciones de independencia o soberanía en lo que respecta a las potencias menores. Estas relaciones internacionales están vinculadas orgánicamente a las variaciones en las relaciones sociales fundamentales de un modo de producción y se articulan de modo singular con la escala nacional.

El análisis de relaciones de fuerzas gramsciano también aporta las claves fundamentales para pensar la conformación de sujetos colectivos. Los mismos

³ Las relaciones de fuerzas militares poseen dos momentos: uno técnico-militar ligado a las condiciones objetivas de las fuerzas, su tamaño, organización, armamento, etc., y un momento político-militar, es decir, formas de acción política que sean eficientes para disgregar «íntimamente» la eficacia militar del enemigo (por ejemplo, desmoralizándolo), o acciones de masas a largo de todo el territorio que lleven a diluir y dispersar buena parte de su capacidad bélica.

poseen anclajes estructurales, convocando a indagar las posiciones y la función que ocupan en la producción, pero su ámbito específico de constitución es en la dimensión política. Las distintas gradaciones que Gramsci distingue en dicha dimensión, nos permite vislumbrar el accionar de los diferentes actores en su nivel económico para luego situarse en el ámbito donde se gestan los sujetos políticos: justamente en el grado hegemónico de la dimensión política, en el marco del antagonismo que marca la disputa por distintos proyectos societarios. En este punto podemos comprender la articulación de los ejes de hegemonía y acumulación con el proceso de integración: los proyectos hegemónicos a escala nacional contienen una concepción del mundo que se moviliza a través de la conformación de sujetos colectivos que encarnan dichos proyectos y van alterando las distintas relaciones de fuerzas, con un componente de universalidad que se expande hacia la escala internacional, la cual es, a su vez, marco de reproducción de relaciones sociales globales según el modo de producción dominante y escenario de disputas a partir de la conformación de distintos bloques en los que se juegan las relaciones de soberanía o dependencia.

En este sentido, procuraremos indagar los rasgos centrales que articulan los ejes de hegemonía y acumulación en los casos nacionales de Venezuela, Brasil y Argentina realizando un ejercicio sintético de periodización y caracterización de cada uno de ellos. Asimismo, abordaremos las problemáticas de la construcción de sujeto identificando aspectos nodales ligados tanto a la dinámica política como a la estructura de clases. También indagaremos los rasgos centrales de la política exterior, analizando la confluencia en el proceso de integración latinoamericano de los distintos casos, tomando en cuenta las particularidades de la articulación entre la escala nacional y regional. De este modo, podremos comprender más cabalmente la inserción de Venezuela, Brasil y Argentina en las distintas construcciones puestas en escena a nivel latinoamericano, viendo sus complementariedades y diferencias.

La Venezuela bolivariana

Entendemos que las principales transformaciones en la sociedad venezolana actual estuvieron signadas a partir de tres puntos de inflexión:

1. Un primer punto de ruptura tuvo lugar en 1998 con el triunfo de una nueva y heterogénea coalición liderada por el Movimiento V República (MVR), que puso fin al bipartidismo imperante y llevó a Hugo Chávez Frías a la presidencia, dando origen luego a una nueva Constitución.

2. Un segundo momento crítico se instituyó con la radicalización de la oposición, enrolada en la Coordinadora Democrática, y las ofensivas desestabilizadoras y golpistas desde fines de 2001.

3. La dinamización del conflicto dio lugar al tercer punto de inflexión relacionado con la profundización de políticas rupturistas que comenzaron a ser articuladas bajo una orientación definida como Socialismo del siglo XXI.

El contexto político estaba caracterizado por la crisis del bipartidismo puntofijista⁴ y una fuerte convulsión social en rechazo a las reformas estructurales de corte neoliberal, que derivaron en el «Caracazo» de 1989 y los levantamientos militares que pusieron a Chávez en la primera plana del escenario nacional⁵. La formación del Polo Patriótico⁶ permitió al chavismo la conquista de la presidencia en 1998. En esa primera etapa, las fuerzas oficiales centraron su esfuerzo en la realización de una reforma constitucional. La nueva Constitución, que establece el nombre de República Bolivariana de Venezuela marcando su vocación fundacional, se constituyó en una herramienta que habilita cursos de acción para sentar las bases de una nueva hegemonía. En este sentido, promueve una profundización de la democracia enfatizando su carácter

⁴ El Pacto de Punto Fijo fue el acuerdo firmado en 1958, tras el derrocamiento del dictador Pérez Giménez, por los líderes de las principales fuerzas políticas (Acción Democrática, copei y Unión Republicana Democrática-urd) con el fin de subordinar la autoridad militar y reconocer a los partidos como los canales legítimos de representación de intereses. Contó con el respaldo de sectores de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, Fedecámaras y parte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Sin embargo, en este acuerdo se excluyó expresamente al Partido Comunista, que venía teniendo una participación destacada en la lucha contra la dictadura. La urd se retiró del pacto en 1962 por diferencias con la política fuertemente pronorteamericana de Acción Democrática, y fue perdiendo gravitación en el escenario político, consolidando el bipartidismo puntofijista. Este funcionó como la forma legítima de organizar el poder político, sustentado en una estrategia de pacto social instituido a través de la redistribución de la renta petrolera entre los principales factores de poder.

⁵ El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) dirigido por Chávez impulsó el levantamiento militar de 1992 que, aun siendo derrotado, tuvo una importante difusión pública a nivel nacional. Con la amnistía brindada por el gobierno de Rafael Caldera, Chávez se metió de lleno en la arena política, iniciando un recorrido por el país con el fin de constituir su propia fuerza, que dio lugar en 1997 a la conformación del MVR.

⁶ En 2006 Chávez llamó a los partidos del Polo Patriótico a fusionarse en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Si bien los partidos más grandes del Polo (PCV, PPTy Podemos) no ingresaron al PSUV, este fue compuesto por el mayoritario MVR y varios partidos menores y alcanzó grandes éxitos en su primer campaña de afiliación a comienzos de 2007, con más de cinco millones y medio de incorporaciones.

participativo, definiendo en su art. 62 que «la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo». También se determinan, en el art. 70, dos dimensiones fundamentales para la *democracia participativa*: una político-institucional que incluye desde la elección y el referendo hasta la organización asamblearia, y otra económico-social, caracterizada por la autogestión y la cogestión (Estado-trabajadores). Se promueve, así, una visión integral de la democracia y al mismo tiempo define el rol económico del Estado, tomando a una perspectiva intervencionista y nacionalista que marca una ruptura con el paradigma neoliberal. En dicho sentido, plantea el derecho de control estatal sobre los servicios y recursos estratégicos de la nación, el monopolio estatal sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la preeminencia de las actividades privadas nacionales sobre las extranjeras.

El planteo inicial del proyecto político-económico de gobierno delinea la conformación de un modelo de acumulación mixto, recuperando el rol del Estado al tiempo que se garantiza la propiedad privada y se reservan a esta distintas áreas de la estructura económica⁷. En 2001, se definen las «Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007» con el fin de avanzar de forma interrelacionada sobre cinco campos, buscando salir de la crisis que había dejado el neoliberalismo y alcanzar un conjunto de equilibrios que serían sintetizados luego por Chávez:

1. El equilibrio político que garantice la democracia participativa y protagónica.
2. El equilibrio económico para garantizar una economía solidaria, productiva y autosostenida.
3. El equilibrio social mediante la educación, la cultura y la justicia, fundamentalmente.
4. El equilibrio territorial para la ocupación proporcionada del territorio nacional.
5. El equilibrio internacional para fortalecer la soberanía, desarrollar la integración no sólo de América Latina sino también con el resto del tercer mundo (Rodríguez Rojas, 2010: 196).

Para esto, a través de la Ley Habilitante, que la Asamblea Nacional sancionara otorgando facultades al Poder Ejecutivo de establecer decretos con valor de ley, el oficialismo aprobó un paquete de 49 leyes buscando alterar las relaciones de fuerzas sociales a partir de incidir sobre el modelo de acumulación. Dentro de estas, la Ley de Hidrocarburos se articuló con una vigorosa política petrolera global pensada tanto para el desarrollo nacional, así como un instrumento de

⁷ Esto puede verse, por ejemplo, en la Agenda Alternativa Bolivariana presentada en 1996.

política exterior. En este camino, se comenzó a tomar acciones internacionales revitalizando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), promoviendo una política de restricción de la oferta con el fin de recuperar el precio internacional del petróleo. También se suspendió el proceso de apertura petrolera, que había sido una política de tendencia privatizadora defendida por la gerencia de PDVSA. Así se avanzó sobre la regulación del sector y se limitó la independencia con la que venía actuando PDVSA al punto de que era considerada como un Estado adentro del Estado (Tomé y Sánchez Iglesias, 2010). Además, se aumentaron las regalías sobre las empresas extranjeras del 16% al 30% y se fijó en 51% la participación mínima del Estado en las sociedades mixtas. Por otra parte, la Ley de Tierras dio lugar a un proceso de reforma agraria que apunta a la desconcentración del latifundio, la entrega de pequeñas parcelas a los campesinos y trabajadores agrarios y la regularización de propiedades, tanto en el campo como en las ciudades. Estos procesos, según López Maya (2004), han desencadenado una intensa dinámica de organización en el campo y los barrios, en tanto las normas exigen la conformación de Comités Rurales de Tierras (CRT) y Comités Urbanos de Tierras (CUT), con la finalidad de gestionar el relevamiento de la información sobre población y viviendas, requerida para acceder a la propiedad.

Estas reformas desataron una fuerte reacción en la oposición gestando un segundo punto de inflexión marcado por la polarización y la confrontación abierta. Del paro patronal en 2001 contra el paquete de leyes se derivó luego en el golpe de Estado de 2002 perpetrado por los partidos de oposición, la cúpula militar y FEDECÁMARAS, que puso a su líder como presidente de facto, con apoyo manifiesto de Estados Unidos. Derrotado el golpe por la movilización popular y las fuerzas militares leales a Chávez, la oposición convocó un nuevo paro patronal el 2 de diciembre de 2002, que se extendió hasta principios de 2003, y cobró su mayor magnitud cuando fue afectada la actividad de PDVSA. Este *paro-sabotaje petrolero*, secundado por la alta nómina de PDVSA, fue un genuino acto de guerra económica de los grupos dominantes sobre el proceso bolivariano conllevando una contracción del PBI en -8,9 en 2002 y -7,8 en 2003, con efectos sociales devastadores⁸. Aun así, el gobierno logró recupe-

⁸ Hubo fuertes incrementos en la desocupación, que venía en retroceso desde la asunción de Chávez, aumentando del 12,8% en 2001 al 16,8% en 2003, con saltos en el mismo período de los índices de pobreza del 45,4% al 62,1% y de la pobreza extrema del 16,9% al 29,8%, debido al fuertísimo incremento en los precios, producto de las estrategias inflacionarias y de desabastecimiento empresarial de alimentos.

rar el control de PDVSA, derrotar la desestabilización económica y lograr un masivo apoyo popular que le permitió salir airoso del referendo revocatorio impulsado por la oposición en 2004.

El propio movimiento del conflicto fue habilitando la radicalización del proceso bolivariano. Si en una primera versión confiaba en el despliegue de políticas orientadas al capital de origen local en la conformación de una economía mixta, la notoria participación de los burgueses «nacionales» en los intentos golpistas llevaron a rever esta posición y a enfatizar la necesidad de conformación de un potente bloque popular que lograra sostener las conquistas y encarar colectivamente el proyecto. Es en este marco que comenzaron a desarrollarse las políticas sociales conocidas como «misiones». Dentro de ellas, se destacaron la Misión Barrio Adentro: dar asistencia médica, atención domiciliaria y suministro de medicinas de modo gratuito a los sectores populares, revirtiendo la lógica centro-periferia de las ciudades, llevando la salud a los «cerros», con un rotundo éxito que llevó a que en 2009 el 54% de la población recibiera atención sanitaria mediante esta misión. También se desplegaron numerosas misiones educativas que llevaron a Venezuela a ser el segundo país de la región libre de analfabetismo y a democratizar todas las instancias formativas, incluyendo la educación superior, con una matriculación universitaria sólo superada por Cuba. La Misión Alimentación permitió ofrecer alimentos de la canasta básica con precios un 42% más bajo que el promedio en los comercios privados, buscando incentivar la producción auto y cogestionada, dándoles cauce a la comercialización de sus productos.

Las misiones comenzaron a confrontar al gobierno bolivariano con la necesidad de transformar el propio Estado para poder garantizar sus objetivos sociales: las misiones iban a ser la alternativa para sortear los obstáculos puestos por la burocracia estatal con el fin de garantizar los derechos populares. Así, estas comenzaron a constituir una especie de *by-pass* (según la expresión de Lander, 2007) sorteando las trabas de las viejas estructuras, dando origen a un nuevo Estado, «una suerte de Estado paralelo participado popularmente» (Monedero, 2009: 7), que pueda llegar directamente a la población necesitada y que al mismo tiempo la haga partícipe. Las misiones implican políticas que aseguran derechos, y de este modo recuperan la universalidad. Abarcando distintas demandas, se constituyen en una genuina herramienta de construcción hegemónica, donde cada necesidad popular se convierte en una trinchera desde donde gestar la nueva sociedad. Además, se basan en procesos organizativos en la comunidad como parte de su diseño y ejecución. En este sentido, entendemos que las misiones desarrollan una estrategia de construcción de poder popular

con base en la democracia participativa: la propia aplicación de la política convoca a profundizar la autoorganización popular, en tanto estas comienzan a ser articuladas muchas veces en instancias de decisión de los ciudadanos, con base en la democracia protagónica en el doble andarivel de lo político y lo económico, alterando las relaciones de fuerzas sociales y políticas.

Las fuerzas bolivarianas entendieron que para avanzar con mayores rupturas con el neoliberalismo debían afectar intereses poderosos y que la realización de los principios de soberanía, democracia y justicia social sólo podían realizarse profundizando la organización de un sujeto popular con un proyecto que trascendiera las lógicas predominantes de la sociedad capitalista. Es así que llegamos al tercer punto de inflexión, el cual se cristaliza en 2005 cuando Chávez proclama en el Foro Social Mundial de Porto Alegre la opción por el socialismo. En 2007 se aprobó el *Proyecto Nacional Simón Bolívar: Primer Plan Socialista de la Nación (2007-2013)* que contiene los lineamientos generales para cambiar todos los niveles de las relaciones de fuerzas. Según el proyecto, Venezuela se orienta hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, a través de distintas directrices planteando la conformación de una nueva ética socialista; desarrollando los principios de democracia protagónica revolucionaria, expresando que la soberanía reside en el pueblo y este puede por sí mismo dirigir el Estado a través de las instancias de democracia participativa. Propone la creación de un modelo productivo socialista, centrado en formas de propiedad social, colectiva, aunque permaneciendo formas de propiedad individual y pública; promoviendo una nueva geopolítica nacional ligada a una nueva geopolítica internacional, que concibe la construcción de un mundo multipolar implicando el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y la paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y respeto. Estas geopolíticas tienen un hilo articulador en la directriz de Venezuela: potencia energética mundial, que sostiene que el acervo energético del país posibilita combinar el uso soberano del recurso con la integración regional y mundial.

Vemos que los ejes de hegemonía y acumulación anudan las escalas nacional e internacional. En términos de hegemonía, el proyecto aparece caracterizado por los principios de democracia y socialismo, unidos en la construcción de poder popular, como estrategia de construcción de sujeto colectivo que logre desarrollar los cambios societarios. El poder popular es definido como «el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de

organización, que edifican el Estado Comunal» (Ley Orgánica de Poder Popular, art. 2). Este nuevo Estado se va erigiendo en las múltiples instancias donde se gesta la participación, desde los Consejos Locales de Planificación Pública, las mesas del agua hasta los Consejos Comunales.

A su vez, el eje de acumulación es repensado desde la dimensión económico-social del proyecto promoviendo las experiencias de producción autogestivas y cogestivas como vía de cambio de las relaciones de fuerzas sociales. El éxito de las políticas públicas en este sentido puede verse en que «el número de cooperativas activas en Venezuela, en el año 2008, era superior al de cualquier país en Latinoamérica. Más aún, la suma de las cooperativas activas de Argentina, Brasil y Colombia, en el año 2008, era inferior al total de cooperativas activas de Venezuela» (Cooperativa Gestión Participativa, 2009: 7). Este proceso fue acompañado por una masificación de estatizaciones y expropiaciones, que constatan el perfil rupturista del proceso venezolano, procurando fortalecer al Estado, recuperando los recursos estratégicos en manos del gran capital, y la organizando empresas dirigidas por sus trabajadores⁹.

La conformación de sujeto popular puede verse también en la mejora en las condiciones de vida y la percepción de ingresos por parte de los trabajadores. Como señala Rodríguez Rojas:

La fuerza de trabajo ha visto mejorar su capacidad adquisitiva entre el período 2004-2007; especialmente los sectores de menores ingresos, que se han beneficiado del incremento sucesivo del salario mínimo y por las transferencias directas en servicios gratuitos de salud, educación y las misiones sociales. Al comparar el índice de remuneraciones del cierre de 2003 con el de 2007 se refleja una mejoría del salario promedio real (18,33%), así como un incremento real del salario mínimo, el mayor de América Latina –con 636 dólares mensuales está por encima del de Argentina, que se ubica en el segundo lugar de la región– (2010: 198).

Así, la distribución del ingreso mejoró de manera continua, lo cual se visualiza en que el coeficiente de Gini en 1999 se ubicaba en 0,47, pasando a 0,42 en 2009, alcanzando a 0,39 en 2012 (Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, INE). Esto también puede percibirse en la estrategia de inclusión previsional. Venezuela pasó de 387 mil personas jubiladas en 1998, a extender la

⁹ El alcance de las estatizaciones, nacionalizaciones y expropiaciones entre 2007 y 2010 puede verse en Caraballo y Pastrana (2010).

cobertura previsional a 1.289.320 en 2008, superando la triplicación del sistema jubilatorio, y aumentó los haberes jubilatorios, teniendo como hito inicial su cuadruplicación en el año 2003. También se aplicaron algunas reformas impositivas de carácter progresivo, ampliando impuestos sobre las regalías petroleras, transacciones financieras, el consumo suntuario, mientras se disminuyó de 16% a 9% el IVA, eliminándose sobre un conjunto de alimentos. Estas políticas generaron un fuerte descenso de la pobreza y la indigencia, las cuales tuvieron una coyuntura crítica producto de la ofensiva patronal en 2002 y 2003, que había llevado al 55,1% de los hogares venezolanos a la pobreza y al 25% a la pobreza extrema (año 2003), logrando revertir este cuadro, quedando respectivamente en 21,2% y 7,1% en 2012 (INE). Este proceso de mejoras fue sustentado tanto por las misiones como por el conjunto amplio de políticas económicas y sociales, incluyendo también reformas legales. Un caso importante fue la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo en 2012, que implica mejoras notables en las condiciones de los trabajadores¹⁰.

Por otro lado, la opción socialista fue precedida y ahora acompañada por una vocación de desarrollo soberano antiimperialista, en tanto busca en el plano internacional confrontar el peso de Estados Unidos desde una perspectiva de mundo multipolar, que tuvo como hito el No al ALCA en la IV Cumbre de las Américas (2005). Se impulsa una propuesta de integración alternativa, opuesta a la estrategia norteamericana y al neoliberalismo. Según Morales Fajardo, «se trata de una integración sin bases capitalistas, con una democracia participativa (de movimientos sociales), con una promoción económica que combina la propiedad estatal, con la social, comunal y cooperativa» (2013: 50-51). Además, se promueve una diplomacia social en tanto Venezuela lleva a cabo una estrategia de programas sociales y uso de recursos para financiamiento y ayuda al exterior, dirigida especialmente a los sectores menos favorecidos, para promover el desarrollo social y disminuir la pobreza en la región (Morales Fajardo, 2013). Así, Venezuela gesta una propuesta latinoamericanista de integración, a través de iniciativas regionales como el ALBA, el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. En la perspectiva socialista, se destaca el ALBA¹¹, firmado inicialmente en 2004 por Cuba y Venezuela. El ALBA es una propuesta que centra su atención

¹⁰ Como ser, reducción de la jornada, eliminación de la tercerización, protección frente a despidos, etc.

¹¹ El ALBA fue primeramente conocido como Alternativa Bolivariana de las Américas, pero, a partir de la VI Cumbre cambió su nombre a Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y el analfabetismo, al tiempo que otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer. Procura combatir las reformas neoliberales instaladas en las décadas pasadas e impulsa un intercambio económico igualitario orientado al desarrollo social, en tanto es concebido como Tratado de Comercio de los Pueblos. En este sentido, se promovió la creación del Banco del ALBA para financiar los proyectos. El 20 de abril del 2010, durante la IX Cumbre del ALBA, celebrada en Caracas, los presidentes de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela firmaron el «Manifiesto de Caracas Consolidando la Nueva Independencia» donde afirmaban buscar liberarse del intervencionismo extranjero, la sumisión a los mandatos imperialistas y construir una base económica socialista. Honduras ingresó al ALBA en 2008 pero, a partir del golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya, salió del mismo.

Asimismo, Venezuela utiliza sus recursos para proyectar su perspectiva regional: «los recursos petroleros sirven para la integración regional con Sudamérica, Centroamérica y el Caribe a través de la suscripción de acuerdos con las empresas estatales de aquellos países. De esta forma, PDVSA es la herramienta que permite el despliegue de la diplomacia social» (Morales Fajardo, 2013: 51). En este punto, es necesario recordar que el triunfo del gobierno en controlar efectivamente PDVSA tras el paro-sabotaje petrolero, permitió desplegar dicha diplomacia con base petrolera. Esto aparece plasmado en distintos planes, como el Simón Bolívar, donde Venezuela se plantea como potencia energética mundial y visualiza este eje no sólo para el desarrollo endógeno socialista sino como parte de su política de integración internacional.

Previamente, en 2006, Venezuela anunció que dejaba la Comunidad Andina de Naciones, debido a la decisión de Perú y Colombia, dos miembros del bloque, de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, reforzando la idea de ingresar al MERCOSUR, lo cual recién se realizó plenamente en 2012. Venezuela también es miembro activo de la UNASUR, que articula a los gobiernos sudamericanos y que ha tenido un importante rol para frenar las ofensivas desestabilizadoras que se generaron en la región, y derrotar a los distintos intentos de golpe de Estado (con excepción del golpe institucional que en 2012 derribó al gobierno de Lugo en Paraguay). Además, Venezuela fue sede de la cumbre fundacional de la CELAC, una experiencia que busca gestar articulaciones político-económicas en América Latina por fuera de la injerencia de Estados Unidos

El proceso bolivariano recibió un fuerte golpe con la muerte de Hugo Chávez en 2013, tanto por su peso como líder regional como porque internamente

volvió a alentar a la oposición a generar nuevas y crecientemente violentas operaciones de desestabilización al gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, confrontado desde las clases dominantes a través de una estrategia definida como de «guerra económica». Asimismo, el apoyo que Chávez le había dado a Maduro, quien posee extracción trabajadora y era el canciller venezolano, permitió remarcar la continuidad del carácter popular del proceso bolivariano y su proyección internacional.

El Brasil del Partido de los Trabajadores (PT)

Lula da Silva, máximo dirigente del PT, alcanzó en 2003 la presidencia luego de ser el principal referente de la oposición desde el retorno de la democracia. En términos globales, podemos distinguir el proceso abierto por el gobierno del PT en dos períodos:

1. 2003-2006: caracterizado por la predominante continuidad neoliberal a nivel económico, pero con reformas relevantes en las políticas sociales.
2. 2007-2013: comienzan a implementarse modificaciones en las políticas económicas ejerciendo transformaciones de carácter neodesarrollista en el modelo de acumulación.

Lula alcanza su primera presidencia llegando a aglutinar en un mismo frente electoral fuerzas heterogéneas, incluyendo desde el Partido Comunista (PCDOB) hasta el Partido Liberal. Este último partido que ocupó la vicepresidencia con José Alencar, importante empresario textil y ex presidente de una corporación patronal paulista, y sería parte de un proceso de creciente moderación del PT con el fin de enfrentar la crisis desatada en los meses previos a las elecciones, dando señales favorables a los sectores más poderosos del capital y a los organismos financieros internacionales. La crisis preelectoral constó de la duplicación del «riesgo país», incremento de fuga de capitales, devaluación de la moneda y aumento de la inflación, aunque se dio en un contexto donde el Plan Real tenía una fuerte adhesión y legitimidad. Para afrontar esta crisis, el PT publicó la Carta al Pueblo Brasileño, en la que se comprometía a respetar el acuerdo firmado por Fernando Henrique Cardoso con el FMI. Esto implicaba adoptar el régimen de metas de inflación, obtener superávits fiscales elevados y altas tasas de interés y mantener las reformas estructurales (Dias Carcanholo, 2008). Pese a ganar la confianza del empresariado a partir de la Carta, el PT llegó con un número relativamente escaso de senadores y diputados, con lo cual estaba obligado a tejer mayores alianzas. En este camino, el gobierno de

Lula comenzó a afrontar las tensiones propias de un proyecto que intentaba hacer confluir continuidad con las políticas económicas de corte neoliberal, pero intentando mantener el apoyo histórico de las clases subalternas, dentro de las cuales se destacaban organizaciones de masas como la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)¹².

Estas tensiones se visualizaron en la cuestión agraria. Si por un lado el Ministerio de Agricultura fue entregado a empresarios de los agronegocios, el Ministerio de Desarrollo Agrario quedó en manos de sectores ligados al MST. Sin embargo, Mançano Fernandes (en Zibechi, 2005) sostiene que este ministerio percibe tan sólo el 10% de los recursos, mientras que el 90% queda en manos de los grandes propietarios. Además, hizo una concesión histórica a los empresarios de agronegocios legalizando la introducción de cultivos transgénicos. Asimismo, el gobierno profundizó la ofensiva de estos sectores del capital aprobando la privatización de una amplia extensión del Amazonas, a pesar de la fuerte oposición de movimientos campesinos, indígenas y parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, dentro de los programas que conforman el Plan Hambre Cero, se desarrolló el Plan Nacional de Reforma Agraria. Sin embargo, esta política fue vista como insuficiente, en tanto alcanzaba sólo cerca del 10% de las familias agrarias. En este contexto, el MST retomó distintas iniciativas de presión y acción colectiva incluyendo la ocupación de tierras.

Por otra parte, según Cano y Gonçalves da Silva, ya en el primer gobierno de Lula se suspendió el veto a la política industrial existente durante los años anteriores, pero esto se dio en un contexto donde se «mantém a política macroeconômica que vinha sendo executada desde 1999, apoiada na combinação do regime de metas de inflação com o câmbio flutuante e a política de geração de superávit fiscal primário, visando a continuidade do controle inflacionário» (2010: 6), con tasas de alto interés. En este sentido, comenzó a desarrollarse la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE), recuperando

¹² A las alianzas preelectorales se le sumaron otras posteriores, como la establecida con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El intento de convergencia entre sectores progresistas y conservadores puede observarse en la conformación del gabinete de su primer gobierno, en el cual el Ministerio de Economía quedaba para el ala más conservadora del PT, la presidencia del Banco Central era ocupado por un ex presidente mundial del Bank of Boston (la segunda mayor institución acreedora de Brasil), y el de Agricultura más el de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior fueron entregados a dos importantes empresarios del sector de agronegocios. Por otro lado, el área social (Educación, Asistencia Social, Medio Ambiente, Salud, Deportes, Cultura) fue confiada al ala izquierda del partido y a sus aliados.

una instancia de planeamiento estatal sobre la industria, aunque la misma tuvo inicialmente una aplicación errática.

Asimismo, se votó una reforma tributaria, cuyos principales cambios implicaron una reducción del Impuesto a la Producción Industrial (IPI), la extensión del impuesto a la importación, el aumento del Impuesto a los Combustibles, una quita del impuesto a las exportaciones y la prórroga del impuesto de la Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros, entre otros (García, 2009).

En las relaciones entre el gobierno y las clases subalternas también se expresó una política ambivalente. El gobierno de Lula aplicó, en consonancia con el FMI, la reforma previsional, a la cual se había opuesto cuando era oposición. Esta se enfocó en modificar el régimen jubilatorio de los trabajadores del Estado, equiparándolo con el del sector privado¹³. La reforma previsional implicó una fuerte reducción de los beneficios hasta entonces recibidos por los segmentos más elevados del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y logró una reducción del gasto fiscal en dicha área del orden del 14%. Por otra parte, Antía y Provasi Lanzara, señalan que contuvo también «estrategias de inclusión previsional en el Régimen General. Se privilegió, para ello, la reducción de las alícuotas contributivas como forma de incentivo a la afiliación previsional de trabajadores del sector informal urbano» (2009: 16).

Además, el gobierno estableció el retorno del cobro sindical obligatorio, cuyo mentor había sido Vargas. Esta medida generó, por un lado, el fortalecimiento de las estructuras sindicales, pero al mismo tiempo dio una mayor independencia de las cúpulas sindicales respecto de las bases en tanto ya no dependen de su aporte voluntario. Por otra parte, algunos investigadores como Campello y Zucco (2008) observan que la principal base de apoyo popular del gobierno ha ido cambiando, comenzándose a apartar de los movimientos organizados, como el movimiento obrero, para asentarse en los sectores más pobres. Esto encontraría su razón en las políticas sociales aplicadas por el gobierno, entre las que destaca el Plan Hambre Cero cuyo principal componente es la Bolsa Familia, que reparte hasta 95 reales a familias con renta inferior a 120 reales.

¹³ La reforma aumenta la edad mínima para jubilarse de los funcionarios públicos (de 53 a 60 años en los hombres y de 48 a 55 años en las mujeres), recortando los haberes de los ya jubilados y reduciendo en casi un tercio las jubilaciones más altas y poniendo un límite máximo (equivalente a 5.825 dólares) para los beneficios pagados. Además, facilita al capital financiero privado la administración de los fondos que aportan los funcionarios públicos a través de mejorar las condiciones para la opción por las jubilaciones privadas, manteniéndose ambos sistemas.

Este programa ha ido creciendo en magnitud hasta alcanzar a más de 45 millones de personas, por lo que se aleja de perspectiva de asistencia focalizada propia de la óptica neoliberal¹⁴. Un aspecto clave de Bolsa Familia son las condicionalidades exigidas en materia de salud (examen de rutina y vacunación) y educación (asistencia del 85% de clases en niños de 6 a 15 años); estas «condicionalidades representam contrapartidas com vistas a certificar o compromisso e a responsabilidade das famílias atendidas e representam o exercício de direitos para que as famílias possam alcançar autonomia e, consequente inclusão social sustentável» (Da Silva e Silva, 2007: 9).

La política social en manos del ala progresista del oficialismo ha arrojado buenos resultados también en materia educacional, consiguiendo altos niveles de escolarización en todos los ámbitos, tanto universitarios como primarios. También ha impulsado la creación del Fondo de Manutención y Desenvolvimento de Educação Básica (FUNDEB), con el objetivo de atender 47 millones de estudiantes brasileños, con inversiones anuales de más de 7 mil millones de reales. Mientras que, en el área de educación superior, el Programa Universidad Para Todos (PROUNI) es considerado el mayor programa de becas de estudio de la historia de la educación brasileña. Por otra parte, en materia de salud se han alcanzado resultados satisfactorios en la reducción de la tasa de mortalidad infantil.

De este modo, el reparto de los ministerios públicos entre el ala conservadora y el ala progresista del marco de alianza del gobierno es un ejemplo ilustrativo de las tensiones de un proyecto que intentaba conjugar el sostenimiento de políticas estructurales de corte neoliberal junto a una estrategia que busca aliviar el malestar de los sectores más pobres de la sociedad reformando su política social.

Durante el primer gobierno de Lula da Silva, en el campo de las políticas económicas primó la continuidad neoliberal, bajo supervisión del FMI: mantenimiento de altas tasas de interés en beneficio del capital financiero, superávit comercial aprovechando la coyuntura internacional favorable a las exportaciones brasileñas y altos superávit fiscales primarios orientados principalmente al

¹⁴ «O Bolsa Família, o maior Programa de Transferência de Renda na atualidade brasileira, encontra-se em implementação nos 5.561 municípios e atendia até julho de 2006 a 11.118.072 das 11.206.212 famílias estimadas pelo IBGE como pobres, o que representa 99,2% dessas famílias, com um orçamento de 8,3 bilhões de reais em 2006. O valor médio da transferência monetária recebida por essas famílias era de R\$ 61,43" (Da Silva e Silva, 2007: 11).

pago de deuda. Como resultado, en este primer momento se mantuvo contraída la participación del salario en el producto mientras se seguían ampliando las rentabilidades del capital financiero, mostrando escasa variación en las relaciones de fuerzas sociales¹⁵. Esto fue generando crisis al interior de PT, presentando escisiones en su ala izquierda.

Sin embargo, junto a las continuidades económicas, también comenzaron a perfilarse algunas rupturas. En 2005 el gobierno de Lula dio lugar a un importante cambio en materia político-económica, que se liga a la posibilidad de aumentar mayores grados de autonomía relativa de la acción estatal:

El gobierno decidió no renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, a fines de ese mismo año, anunció el pago del total de la deuda con el organismo (15.500 millones de dólares) que vencía en 2007. [...] Esta medida fue concertada con Argentina (que a los pocos días también anunció el pago total de su deuda con el Fondo) y permitió el ahorro de 900 millones de dólares, además de ser muy bien recibida por los mercados financieros internacionales (García, 2009: 6).

Por otra parte, si bien no revirtió las privatizaciones ya realizada, cortó el proceso privatizador, dando lugar a la conformación de asociaciones público-privadas para las obras de infraestructuras.

Con el segundo gobierno de Lula da Silva se llegó a un punto de inflexión, donde comienza a conformarse un modelo de acumulación que articula elementos de continuidad neoliberal con otros novedosos de carácter neodesarrollista, que se fueron profundizando durante el gobierno de Dilma Rousseff.

Según Barbosa e Souza, la construcción del viraje neodesarrollista se originó a partir del establecimiento de tres líneas de acción:

[1] Adoção de medidas temporárias de estímulo fiscal e monetário para acelerar o crescimento e elevar o potencial produtivo da economia; [2] a aceleração do desenvolvimento social por intermédio do aumento nas transferências de renda e elevação do salário mínimo; e [3] o aumento no investimento

¹⁵ «Os indicadores analisados apontam uma tendência persistente de perda relativa de rendimentos do trabalho para o capital ao longo dos mandatos de fnce Lula: a participação do salário na renda nacional caiu de 32% (2000) para 31% (2004), a proporção entre a massa salarial e excedente operacional bruto caiu de 94,3% para 86% mesmo período e o salário médio cresceu 3,9% menos que o pib durante o governo Lula, segundo dados do ibge. Em contrapartida, os rendimentos do setor financeiro não pararam de crescer, absoluta e relativamente. A participação dos ativos dos grandes bancos no pib saltou de 11,6% no primeiro mandato de fnc para 17,2% no segundo mandato e 19,3% no primeiro mandato de Lula» (Coelho, 2008:217).

público e a recuperação do papel do Estado no planejamento de longo prazo (2010: 69-70).

En términos de estímulo fiscal a la producción, el gobierno desplegó importantes inversiones públicas a través del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), con grandes obras de infraestructura, y promovió líneas de crédito industrial a largo plazo y bajo interés a través del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). Se impulsó una mejora de las empresas estatales y se profundizaron las políticas hacia la industria, avanzando en la formulación de una nueva fase del PITCE, ampliando el número de sectores e instrumentos, bajo la denominación de «Política de Desenvolvimento Produtivo» e implicando una exención impositiva de 21,4 billones de reales para la industria entre 2008 y 2011. Esto favoreció el fortalecimiento del capital brasilero y estatal, dando lugar a una retracción moderada del proceso de desnacionalización de la cúpula empresarial¹⁶.

Siguiendo a Schutte (2013), el nuevo enfoque neodesarrollista habilitó la gestación de cambios en la política energética, modificando en 2010 el marco regulatorio. Así se avanzó a una ampliación de la renta capturada por el Estado y un aumento del control estatal sobre Petrobras, aunque más del 50% sigue estando en manos privadas. Se impulsó un crecimiento del control de Petrobras sobre la producción, ya sea asegurándole un 30% en las explotaciones licitadas, o adjudicándoselas directamente en un 100%. Además, «el nuevo marco regulatorio creó una nueva empresa 100% estatal, la Empresa Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural-Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), responsable por la gestión de los contratos de distribución de producción y la comercialización del petróleo y gas natural en el Estado federal. También asumirá el control de los costos de la operación en defensa del interés del Estado, inclusive frente a la propia Petrobras» (Schutte, 2013: 128).

Por otra parte, en materia de distribución del ingreso, se avanzó a partir de la

¹⁶ «Ainda como indicador da desnacionalização da economia brasileira pode-se usar a distribuição das vendas das 500 maiores empresas segundo a origem da propriedade. Os dados mostram que a participação das empresas estrangeiras cai de 44,9% em 2002 para 41,6% em 2010, enquanto a participação das empresas privadas nacionais aumenta de 36,3% em 2002 para 37,4% em 2010 e a das empresas estatais sobe de 18,8% em 2002 para 21,0% em 2010. Estes números indicam, aparentemente, a redução do elevado grau de desnacionalização da economia brasileira» (Gonçalves, 2011:7). Según el autor, esto se explica porque las tres mayores empresas del país (Petrobrás, BR Distribuidora y Vale) tienen un peso elevado en la economía brasilera, representando el 13,3% y el 16,1% de las ventas de las 500 mayores empresas en 2002 y 2010 respectivamente. Excluyendo a estas tres empresas, se evidencia un aumento del capital extranjero en la distribución de la renta de las 497 empresas más grandes.

expansión de la Bolsa Familia, la creación de empleos y la elevación del salario mínimo y las jubilaciones públicas. Como sostiene Rocha (2013), el salario mínimo aumentó en términos reales un 53,6% permitiendo pasar de una participación del salario en el PBI del 40% al 43,6% entre 2003 y 2009. En este período se crearon 14 millones de empleos. Esto se dio, por un lado, con un descenso de la desigualdad, en tanto, entre 2003 y 2010, el ingreso del 10% más pobre creció al 8% anual, mucho más intensamente que el conjunto de la economía y que el 10% más rico, que lo hizo al 1,5%. Por otra parte, conllevó una expansión de los sectores medios (con ingresos entre 550 y 2.400 dólares) del 38% en 2002 al 53% en 2010. Así, la pobreza bajó del 35,8% de las familias en 2003 al 21,4% en 2009.

Aun con las marcadas rupturas, el escenario político-económico brasileño no deja de evidenciar algunas tensiones relevantes. La sobrevaluación del real ha reducido la competitividad internacional, deteriorando el despegue exportador y limitando el saldo comercial (Morais y Saad-Filho, 2011). Si bien hubo recuperación de políticas industriales, la inserción de la economía brasileña en el mercado mundial profundizó la tendencia a la reprimarización de las exportaciones, ya que los productos manufacturados pasaron de explicar el 56,8% en 2002 al 45,6% en 2010, tendencia opuesta a la exportación de productos básicos que pasó del 25,5% al 38,5% en el mismo período¹⁷ (Gonçalves, 2011). Pero la principal continuidad se da en el bloque de poder, según Gonçalves, «verifica-se a dominação financeira. Esta pode ser entendida como a ascendência do setor financeiro, inclusive sobre os outros setores dominantes. A dominação financeira tem expressão concreta na apropriação do excedente econômico. No Governo Lula a taxa média de rentabilidade (lucro/patrimônio líquido) dos 50 maiores bancos é sempre superior à das 500 maiores empresas em todos os anos do período 2003-10 [...]. Neste período a taxa média de rentabilidade das maiores empresas é 11,0% enquanto a taxa dos bancos é 17,5%» (2011: 11-12).

Finalmente, un aspecto destacado en el Brasil del PT es su política exterior. Por un lado, Brasil ha impulsado la integración de los países del Tercer Mundo y ha adoptado posiciones críticas de Estados Unidos en distintas coyunturas, como la invasión a Irak. En América Latina ha buscado fortalecer el MERCOSUR y

¹⁷ Este aspecto se evidencia también al interior de las exportaciones industriales, donde se reduce la participación de los productos de alta tecnología (13,1% a 8,1%) frente a la expansión de los de media-baja tecnología (21,7% a 25,1%)

ha sido parte del rechazo al ALCA en 2005. Si bien ha habilitado el acercamiento de Venezuela al MERCOSUR, según Zibechi (2007), Brasil demoró su aprobación al ingreso definitivo a raíz del rechazo de la centroderecha, parte de la cual se encuentra dentro de la alianza oficialista (el cuál se terminó realizando en 2012 ayudado por la presión de Argentina tras el triunfo del golpe de Estado en Paraguay). Según Morales Fajardo (2013), ya desde el gobierno de Lula, la activa presencia del canciller Celso Amorim le permitió a Brasil desplegar su proyecto de liderazgo regional y proyectarlo en diversos foros mundiales, tales como el G-20 comercial y la oposición al ALCA. Además de la relevancia del MERCOSUR, buscó articular toda Sudamérica, impulsando en 2004 la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que en 2008 se relanzó como UNASUR, como plataforma continental esencial en su desarrollo como protagonista global. En este camino, Morales Fajardo sostiene:

El interés hegemónico de Brasil representa el mayor incentivo para respaldar a UNASUR. La creación de este proyecto le ofrece una plataforma institucional para crear la infraestructura necesaria para su conexión con otros países, lo cual incentiva el intercambio comercial y el desarrollo de inversiones. Además, geopolíticamente, le garantiza un espacio de seguridad y sustenta el liderazgo que le es necesario para su trascendencia global (2013: 56).

A la par, Brasil promovió alianzas estratégicas con potencias emergentes fuera del continente, como el BRICS, para proyectarse como potencia mundial.

De este modo, los aspectos progresivos y regresivos de la política exterior brasilera son recuperados por Gaudichaud (2010), señalando que, por un lado, Lula siempre ha apoyado a Chávez (por ejemplo, durante el golpe de Estado en 2002), mantiene también buenas relaciones con el gobierno cubano y fue muy claro sobre la situación en Honduras tras el golpe contra Zelaya. Asimismo, favorece las relaciones Sur-Sur siguiendo un principio de multipolaridad y buscando tener más espacio en el escenario mundial, rechazando las injerencias de las grandes potencias del Norte, lo que explica su apoyo a Irán frente a Estados Unidos o la denuncia de nuevas bases militares estadounidenses en Colombia, así como el fuerte crecimiento del intercambio comercial con China. Además, apuesta por el desarrollo de la UNASUR. Pero, por otro lado, el mismo autor señala:

Aunque Brasil propugne la autonomía, no defiende un modelo de desarrollo alternativo, sino todo lo contrario. En el terreno económico actúa siguiendo una orientación capitalista desarrollista, e incluso en algunos

aspectos neoliberal. En sus relaciones con los países de la región, se detecta una clara voluntad de hegemonía de proximidad. Algunos autores hablan de «semiimperialismo» o de «imperialismo periférico». Varias empresas brasileñas son multinacionales que practican una política económica agresiva hacia sus vecinos: Petrobras con el petróleo u Odebrecht en el ámbito de la construcción, que han provocado conflictos importantes con países cercanos como Bolivia o Ecuador [...]. La misma relación desigual se da con Paraguay en cuanto a la gestión de recursos hidroeléctricos comunes en Itaipú, donde Paraguay ha sido literalmente privado de su soberanía en ese sector. Y es que la burguesía financiera e industrial brasileña (en especial la de São Paulo) defiende así sus prerrogativas en el mercado mundial, lo que, por otra parte, no impide los acuerdos estratégicos entre Brasil y Estados Unidos, por lo que respecta, por ejemplo, a los agrocombustibles (Gaudichaud, 2010: 1).

Esto puede constatarse en la ejecución de políticas que promueven la fusión empresarial, fortaleciendo al gran capital, y en el avance de las transnacionales brasileñas sobre las economías nacionales de la región, como se evidencia en el caso de Argentina, donde los capitales brasileños compraron numerosas empresas características de dicho país, como Quilmes, Acindar, Pérez Companc, Loma Negra, Topper, Paty, entre otras. Aparece un juego ambivalente entre el destacado peso de Brasil en el proceso de integración regional apoyando incluso a las experiencias más radicalizadas, pero al mismo tiempo una proyección teñida de rasgos «semiimperialistas» hacia la región como terreno ampliado para la acumulación del capital brasileño y como plataforma para pararse como potencia capitalista mundial.

La Argentina del kirchnerismo

La historia político-económica de la Argentina reciente encuentra en el kirchnerismo a su principal fuerza política. Poniendo el foco sobre su llegada al gobierno, podemos definir la siguiente periodización:

1. El doble preludio 2001-2002: desde la crisis de 2001 al cambio de modelo de acumulación bajo el gobierno de Duhalde en 2002.
2. La fase de ascenso hegemónico del kirchnerismo 2003-2007.
3. Nueva crisis y recomposición desde 2008-2011.

El primer punto de inflexión se inició con la crisis de 2001, la cual atravesó una multiplicidad de dimensiones, evidenciando a nivel ideológico-cultural

el fin de la hegemonía del pensamiento único neoliberal, con su perspectiva de Estado mínimo y dominio indiscutido y naturalizado de los grandes grupos económicos. También se manifestó una crisis política que implicaba la deslegitimación de los partidos como canales de representación, del bipartidismo reinante, y una crisis de autoridad estatal en general en tanto el Estado no lograba dar respuestas a los crecientes reclamos populares. Finalmente, había una crisis económica proveniente del colapso visible del modelo de la convertibilidad, que constituía la expresión más acabada del neoliberalismo argentino. Este contexto se expresaba por abajo en un auge de la lucha popular y por arriba en distintas disputas al interior de la clase dominante para intentar definir el modo de salida de la crisis.

Tras la caída de varios presidentes en pocos días, y habiendo sancionado el *default* de la deuda externa pública, es elegido presidente por el Parlamento Eduardo Duhalde. Este presentó un discurso productivista, que buscaba rearticular componentes del peronismo clásico, y una estrategia dual frente al conflicto social, de contención, a través de la masificación de los planes sociales, y de coerción, con una ofensiva represiva y criminalizadora contra los movimientos sociales. A su vez, estableció un conjunto de medidas que dio origen a un nuevo modelo de acumulación tales como la devaluación, el congelamiento y rediscusión de tarifas de los servicios públicos, las retenciones, la pesificación de deudas, entre otras. Pero estas se aplicaron con un fuerte sesgo regresivo descargando el costo de cambio de modelo sobre los trabajadores, ya que mientras se licuaron las deudas del gran capital con la banca local y se compensaron a los bancos, la inflación arrasó con un tercio del salario real, la desocupación superó el 23% y la pobreza el 57%. Esta brutal transferencia de recursos de asalariados a capitalistas que profundizó la concentración económica fue la marca de origen del neodesarrollismo argentino. Pero al mismo tiempo mostró en política exterior algunas decisiones que empalmaban con el cambio de época que comenzaba a vivirse en la región: Duhalde condenó el golpe de Estado a Venezuela y no dio apoyo a la invasión norteamericana a Irak (Brieger, 2009).

En este contexto, con sólo el 22% de los votos, Kirchner llega a la presidencia en 2003 y enfrenta la aún inconclusa crisis de 2001, en sus distintas dimensiones, planteándose a sí mismo como momento de sutura. En este camino podemos señalar dos elementos fundamentales: (a) la construcción del neoliberalismo como adversario en el discurso, profundizando una recuperación y resignificación del peronismo como identidad mayoritaria; y (b) la recuperación del Estado como mediación, con un rol destacado en el proceso

de «armonización» de intereses bajo una estrategia de pacto social entre capital y trabajo, y un rol de intervención económica contrastante con los años neoliberales.

El gobierno de Kirchner dio lugar a un conjunto de rupturas significativas con el orden precedente. Entre ellas se destacan distintas acciones estatales para detener la caída del salario real e impulsar distintos grados de recomposición del ingreso. El aumento del salario mínimo, que se dio a partir de la convocatoria al «Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil», revalorizando las mediaciones sindicales y patronales, y que sería incrementado anualmente. Los convenios colectivos de trabajo superaron en 2007 la cuadruplicación del promedio de la década anterior, permitiendo importantes recuperaciones del salario real a los trabajadores formales, principalmente en la industria. Además, se aumentó y extendió la jubilación mínima, incorporando 1.800.000 nuevos jubilados, alcanzando prácticamente su universalización. Asimismo, el gobierno impulsó acuerdos de precios para intentar contener la inflación. Las retenciones a las exportaciones actuaron también en el mismo sentido. Aun así desde 2007 volvió a desatarse una fuerte presión inflacionaria que comenzó a atentar contra la recuperación del salario real. Estas políticas generaron un efecto redistributivo sustentado, a su vez, en el descenso de la desocupación que pasó desde el 23,3% en 2002 al 7,2% en su mejor momento en 2007, con fuerte incidencia en la baja de la pobreza, que pasó del 57,5% en octubre de 2002 al 26,9% en el segundo semestre de 2006, y de la indigencia, que pasó del 27,5% al 8,7%, reduciéndose cerca de un 70%, en el mismo período. También disminuyó la desigualdad, en tanto el coeficiente de Gini pasó del 0,537 en 2003 al 0,485 en 2006; pero se incrementó la heterogeneización en las remuneraciones salariales entre trabajadores formales o informales y estatales o privados.

En este camino, el kirchnerismo fue conformando su propio proyecto de gobierno, caracterizado en un comienzo como un «capitalismo nacional» que habilitara la movilidad social ascendente, volviendo a la senda del desarrollo con inclusión social. El proyecto es planteado como la construcción de un pacto social dirigido desde el Estado, manteniendo la centralidad de la «burguesía nacional», aunque se la comienza a ver como un sujeto que no está plenamente constituido, sino que debe ser apuntalado, y va cobrando mayor jerarquía el lugar del trabajo. Esto se liga a un cambio en las relaciones de fuerzas entre las fracciones de clases, tanto en la recomposición de las condiciones de vida de las clases subalternas en el escenario post-crisis como a cambio al interior del bloque de poder donde cobró centralidad del capital

productivo. Esto se explicita en un doble sentido: por un lado, en la centralidad de grandes empresas productivo-exportadoras ligadas principalmente a la explotación y exportación de recursos naturales (agroindustrias, hidrocarburos, minería), incluyendo otros núcleos destacados como la industria automotriz y segmentos de las industrias químicas y siderúrgicas; y por el otro, la recuperación de un amplio espectro de pequeñas y medianas empresas (pymes), implicando la formación de 87.000 unidades productivas que tuvieron un desempeño destacado en la creación de empleo (que explica el 85% del nuevo empleo industrial) pero con salarios un 48% más bajos que los de las grandes empresas y una alta informalidad, del 60%. La industria tuvo un fuerte crecimiento, del 7% anual entre 2003 y 2007¹⁸. Asimismo, se manifestó como ruptura frente a las décadas neoliberales el importante incremento del empleo industrial, presentando una tasa anual media del 5,8% entre 2003 y 2008, contrastante con el -4,2% del período 1991-2001 (Tavosnanska y Herrera, 2009).

Por otra parte, las empresas de servicios privatizadas, que tenían las rentabilidades más altas de la economía argentina en los años 90, fueron afectadas por la regulación de tarifas e incluso estatizaciones, como las del Correo Argentino, Aguas Argentinas convertida ahora en Aysa, el control del espacio radioeléctrico, entre otras. De conjunto, estas acciones generaron un esquema de precios relativos favorables a la producción de bienes, estableciendo asimismo una estrategia de subsidio al consumo de los principales servicios por parte de la población.

En este trayecto, el kirchnerismo comenzó conformarse como una construcción ambivalente, conteniendo en su interior, como el peronismo clásico, componentes normalizadores y sistémicos, que se articulan de forma conflictiva con componentes populares y rupturistas. Así, avanzó a recomponer las condiciones de empleo e ingresos de las clases subalternas, pero limitado al horizonte de un «capitalismo nacional» de carácter neodesarrollista. Y este va a ser un «corcet» por las propias características estructurales de la burguesía argentina. El modelo de acumulación post-convertibilidad dio impulso a los grupos productivo-exportadores sin lograr grandes cambios en la cúpula económica local, la cual se mantuvo fuertemente concentrada y extranjerizada. El fantasma

¹⁸ Hasta 2007 «fue particularmente importante en manufacturas que habían sido muy castigadas por la reestructuración sectorial regresiva del período 1976-2001 y que suelen caracterizarse por una presencia significativa de Pymes y elevados requerimientos de empleo: maquinaria y equipo, diversas metalmecánicas, textil e indumentaria, calzado y marroquinería, etc. (Schorr, 2012: 117).

de la «burguesía nacional» aporta complicaciones al proyecto, porque no se expresan agentes económicos que puedan aportar ese rol deseado en el marco del pacto social, que lidere un desarrollo soberano compatible con la distribución del ingreso, porque de un lado, la cúpula está extranjerizada y concentrada y realiza buena parte de su ganancia en el exterior; y del otro, las pymes no tienen capacidad productiva para hacerlo y su variable de ajuste termina siendo el trabajo. Aparecen entonces dos almas que conviven disruptivamente en el kirchnerismo: una nacional-popular que confronta con la herencia del neoliberalismo y puja por rupturas que mejoren las condiciones de vida del pueblo, que lo vuelvan protagonista desde la recuperación de la política como herramienta de cambio, y que aboga por el desarrollo de la nación, rompiendo las «relaciones carnales» con Estados Unidos para articularse con el proceso latinoamericano; y otra alma neodesarrollista, que recupera ciertos roles económicos del Estado pero que se articula en una lógica productivo-exportadora que no logra resolver el problema de la concentración y la extranjerización, a pesar de las numerosas conquistas sociales.

En materia de política exterior, 2005 fue un año clave. Por un lado, se realizó el canje de deuda, que le permitió sacar a la Argentina del *default*, con una importante quita. En noviembre, el gobierno jugó un papel audaz al ser anfitrión de la IV Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos buscaba aprobar el ALCA, y auspició, informalmente, la contra-cumbre que criticaba la llegada de Bush y, tuvo como principal orador a Hugo Chávez, quien sentenció que se estaba enterrando al ALCA, acción luego coordinada en la cumbre desde el acuerdo de Chávez, Lula y Kirchner. A su vez, en coordinación con Brasil, se anunció a fines de dicho año que se pondría fin al tratado con el FMI, y los condicionantes en materia de política pública que el organismo imponía, y se pagó por adelantado la deuda en su conjunto por unos US\$ 9.810 millones.

Distintos autores han remarcado el peso importante de la relación entre la política exterior y el modelo de acumulación (Simonoff, 2008; Zelicovich, 2011). La inserción internacional es definida a través de objetivos de política económica, dándole al MERCOSUR un lugar estratégico:

El bloque aparecerá como vía para la inserción internacional, en términos fundamentalmente de comercio e inversiones; como sustento para la generación de autonomía; como herramienta para la expansión hacia la región; como estrategia en las negociaciones con terceros; y como herramienta para la realización del modelo de desarrollo propuesto (Zelicovich, 2011: 185).

Asimismo, la lógica de construcción hegemónica también tiene claras incidencias en el perfil de inserción regional propuesto: desde la asunción de Kirchner, con la participación de Fidel Castro y Hugo Chávez, no podía sino evocar el espíritu setentista, recordando la participación de Dorticós y Allende en la asunción de Cámpora en 1973 (Simonoff, 2008). Este perfil se vio profundizado al posicionarse el gobierno en creciente crítica al neoliberalismo y al rol de los organismos financieros internacional, así su activa política de derechos humanos contra los crímenes de la última dictadura (1976-1983).

El inicial momento de ascenso hegemónico del kirchnerismo y consolidación del modelo de acumulación tuvo su primer revés en 2008. A pocos meses de asumir Cristina Fernández de Kirchner, estalló el conflicto agrario a raíz de la «resolución 125», que establecía un aumento en las retenciones a determinados productos del agro, cuyo precio había alcanzado un record histórico, y un régimen móvil de las mismas ligado al precio internacional. Esto marcó un punto de inflexión en diversas dimensiones. A nivel de las fracciones de clase, se produjo la particularidad de que los agentes económicos y las representaciones corporativas ligados al circuito productivo sojero que salieron a enfrentar al gobierno constituían parte de la principal fracción beneficiaria del modelo, la fracción productivo-exportadora del capital, pero que a raíz de largos procesos de concentración y de transformación productiva ligadas al agronegocio¹⁹, acumularon suficiente poder social como para salir a la confrontación abierta y poner en jaque al gobierno²⁰.

¹⁹ Esto se vincula con las transformaciones de largo plazo relacionadas con la «revolución verde» y el proceso de agriculturización (devenido en creciente sojización), y el impacto que dichos procesos tuvieron sobre los agentes económicos. A nivel estructural venía gestándose en el agro un triple proceso de concentración: (a) concentración estructural de la tierra, donde sólo el 4,2% de las explotaciones agropecuarias poseen el 62,8% de las hectáreas totales, con desaparición del 21% de los establecimientos productivos entre 1988 y 2002; (b) concentración del capital presente tanto en el desdoblamiento creciente entre propietarios (devenidos en rentistas) y contratistas (propietarios de tierra o no), a la que se suma la concentración del capital en los eslabones finales del proceso productivo, en tanto sólo seis empresas controlan el 80% de la industrialización de la soja; y (c) concentración de la organización y gestión del proceso productivo mediante grandes empresas agropecuarias-financieras que utilizan la estrategia de armar pools de siembra (Varesi, 2010).

²⁰ A pesar de multiplicar su rentabilidad (en términos globales) incluso con el nuevo esquema de retenciones, los agentes ligados al circuito sojero se lanzaron para disputar mayores márgenes de ganancias y rentas extraordinarias. El conflicto estuvo también signado por elementos estrictamente políticos que incluyen desde los déficits en la estrategia oficial, el rol opositor y

Es en este enfrentamiento donde comenzó a visualizarse la articulación de un alineamiento que, desde el interior de la clase dominante, se conformó como adversario del oficialismo. Cada vez de forma más clara comenzaron a aparecer articulados un espectro que abarca a agentes y corporaciones del agro, la derecha y centroderecha política y los principales medios de comunicación. Este alineamiento gestó una ofensiva que no sólo logró derrotar en el Congreso la medida de retenciones móviles, sino que también se mostró triunfal en las elecciones legislativas de 2009.

A los embates políticos se le sumaron las dificultades económicas. La crisis mundial comenzó a manifestarse localmente a través de dos mecanismos de propagación principales: el impacto en materia de comercio exterior, con fuerte caída en los volúmenes y precios de las exportaciones (cortando un crecimiento consecutivo de cinco años)²¹, y en el ajuste en los planes de producción de las empresas, que llevaron a la desaceleración del crecimiento, la retracción del producto industrial, el aumento del desempleo y a un pico de fuga de capitales²².

En este contexto, el gobierno comenzó a desarrollar un extenso plan anticrisis que remarca el perfil neodesarrollista del proyecto oficial con sus incidencias a nivel del modelo de acumulación. Para financiar parte del plan, el gobierno definió la estatización de las AFJP, administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones, ligadas a los conglomerados financieros, que venían realizando millonarios negocios con los mismos desde los años 90. Esta acción estatal fue cardinal también para fortalecer las cuentas públicas y sostener el superávit fiscal²³. En este camino, se lanzó un amplio abanico de medidas encaminadas a mantener los superávits comercial y fiscal y suavizar el impacto de la crisis mundial sobre el PBI y el empleo. El plan se basó en medidas de

organizador de los medios de comunicación hasta retraducciones particulares de enfrentamientos históricos como centralismo/federalismo y peronismo/antiperonismo, entre otros.

²¹ Se evidenció una fuerte subordinación de la estructura exportadora a los vaivenes de los precios de los commodities, en tanto la balanza comercial volvió a mejorar su desempeño al ritmo de la recuperación del precio internacional de los mismos.

²² La Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) se contrajo, llegando en el I trimestre de 2009 al pico más fuerte de reducción de la variación anual desde 2002: un -14,2%. Asimismo, la fuga de capitales que se triplicó en 2008. Esto acarreó una creciente desaceleración económica plasmada en la variación anual del pbi, que, ubicándose en el III trimestre de 2008 al 6,9%, cayó hasta el 2% en el I trimestre de 2009, con fuerte impacto negativo en la industria. Así, comenzó a crecer el desempleo, del 7,2% en 2007 al 8,8% en 2009.

²³ Con esta acción, el Estado transfirió fondos acumulados por \$97 mil millones y comenzó a recibir aportes anuales calculados entre \$ 12 y \$ 15 mil millones.

política cambiaria, incrementando la devaluación para mejorar la capacidad exportadora y aumentar la protección frente a los importados, para lo cual también se implementaron una serie de medidas comerciales²⁴, tendientes a proteger la producción local en áreas sensibles intensivas en trabajo. También se realizaron transferencias indirectas hacia el capital, basadas en exenciones y rebajas impositivas como las involucradas en la Ley de Promoción de Inversiones (\$ 1.200 millones anuales) y una amplia moratoria impositiva. Así como transferencias directas como la profundización del Programa de Recuperación Productiva que otorga a empresas en crisis un subsidio por trabajador hasta \$ 600 mensuales para completar salario, y cuadruplicó sus fondos a inicios de 2009, alcanzando los \$ 197 mil millones. También se realizaron medidas de incentivo al consumo y blanqueo de capital, para enfrentar la creciente fuga de los mismos. Una acción clave fue un masivo Plan de Obra Pública (de \$ 111 mil millones) para infraestructura vial, mejoramiento del hábitat social, energía, minería y transporte público a ejecutarse entre 2009 y 2011. Además, se realizaron un conjunto de medidas orientadas a las clases subalternas, como el aumento del salario mínimo, un plan de creación de mil cooperativas y un paquete de medidas sociales cuyo componente más importante, la Asignación Universal por Hijo, que brinda cobertura a los menores de 18 años cuyos padres estén desocupados o trabajen en el sector informal y posean un ingreso menor al salario mínimo. También, se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria para incrementar dichos haberes dos veces al año.

El plan anticrisis mostró buenos resultados en la limitación del impacto de la crisis mundial a través de políticas que contrastaron con las de carácter neoliberal aplicadas en décadas previas en Argentina y en el presente en Europa: lejos de recortar el gasto público y social, este se amplió en defensa del empleo y como estimulador de la demanda; y en vez de realizar salvatajes al capital financiero, se les reestatizaron las AFJP y sus recursos se pusieron al servicio de los sectores productivos y populares.

Por otra parte, las fuerzas ligadas al gobierno comenzaron a enfrentar a sectores del capital que iban corriéndose de la coalición oficialista, dando origen a un proceso de radicalización progresista (Varesi, 2011). Esto ocurrió con la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo contenido antimonopólico favorece una mayor pluralidad de perspectivas ya

²⁴ Tales como derechos antidumping, licencias no automáticas e incremento de los valores de referencia a la importación.

que prevé la regulación de licencias y su repartición en tres tercios: uno para privados, otro estatal y un tercero para organizaciones sin fines de lucro. Esto agudizó el enfrentamiento con los principales grupos económicos de la comunicación, entre el que destaca el Grupo Clarín, principal concentrador de medios a nivel nacional que ya había sido afectado por la estatización de la emisión de fútbol, cuyo monopolio detentaba. Además, el proceso de radicalización contuvo otros hitos de estatizaciones como el 51% de las acciones de YPF, la empresa más importante de la estructura argentina, privatizada en los 90, y la aerolínea de bandera. También se lanzó el PRO.CRE.AR, el plan de créditos para vivienda más importante de las últimas décadas. A su vez se avanzaron en la conquista de derechos civiles como el matrimonio igualitario, entre parejas del mismo sexo, y la Ley de Identidad de Género que permite a toda persona la rectificación registral del género y el cambio de nombre, cuando estos no coincidan con la identidad de género autopercebida. En materia de educación se pasó de una inversión del 3,64% del PBI a 6,50% en 2012 (de un PBI sustancialmente más grande), y se desarrolló el plan Conectar Igualdad que distribuyó más de 2.200.000 computadoras a los estudiantes secundarios de escuelas públicas.

En este contexto de avance, fallece Néstor Kirchner y su funeral en casa de gobierno se convirtió en un masivo evento de apoyo popular, instituyéndolo como un mito en la política argentina. Con la efectividad demostrada de las políticas anticrisis, el gobierno fue recuperando adhesiones y Cristina Fernández logró su reelección en 2011 con el 54% de los votos, dando lugar a un nuevo mandato caracterizado por los vaivenes de la economía, con políticas activas pero cuentas públicas en deterioro y fuertes estrategias desestabilizadoras por parte de la oposición política y patronal.

En el plano de la política exterior, el gobierno de Fernández tuvo un rol activo en distintos planos. Llevó firmemente ante los foros y organismos internacionales el reclamo por Malvinas. Además, apostó fuertemente a la UNASUR, tomando un rol protagónico, por ejemplo, en el apoyo a Evo Morales en 2008 frente a los intentos de desestabilización. Fernández también tuvo un rol destacado en la Cumbre del Grupo de Río que trató la intervención militar de Colombia en territorio ecuatoriano, así como en la cumbre de UNASUR para analizar la situación de las bases militares en Colombia (Brieger, 2009). También enfrentó el golpe de Estado en Honduras, buscando el restablecimiento de Zelaya en la presidencia, y el golpe institucional en Paraguay a Lugo, donde motivó la suspensión del gobierno de facto de participar en el MERCOSUR y aprovechó la coyuntura para impulsar que se sancionara la incorporación

definitiva de Venezuela al bloque. Además, recientemente Argentina fue invitada a participar de la cumbre del BRICS, con lo cual profundiza su acercamiento a Brasil en el marco de gestar un orden mundial multipolar que, sin dejar de hacer foco en la integración latinoamericana, impulse la articulación de las economías emergentes a nivel internacional y contrapesa el poderío de Estados Unidos y sus aliados europeos.

Conclusiones integradas

El análisis de los casos nacionales de Venezuela, Brasil y Argentina nos permite ver cómo las particularidades de las dinámicas de hegemonía y acumulación a escala nacional se interrelacionan de forma compleja en el proceso de integración que vive actualmente América Latina. Los distintos proyectos hegemónicos puestos en juego, al tiempo que inciden en el modelo de acumulación de cada formación social nacional y altera las relaciones de fuerzas sociales y políticas, también se enmarca y atraviesa la escala internacional a través de la conformación de estrategias diversas que constituyen el devenir del bloque regional latinoamericano.

El caso de Brasil es de gran relevancia en tanto es la principal economía latinoamericana y la sexta a nivel mundial, por lo que su desempeño a nivel nacional repercute rápidamente en el escenario regional. Distinguimos dos períodos de su historia reciente. Durante el primer mandato de Lula da Silva, se evidenciaron elementos de continuidad neoliberal a nivel económico, siguiendo el tratado con el FMI y fijando una macro basada en metas de control de inflación a través de altas tasas de interés y sobrevaluación cambiaria, junto con políticas favorables al agronegocio en materia agraria, aunque se exhibieron cambios positivos en las políticas sociales, como aquellas englobadas en el Plan Hambre Cero, y en materia educativa. Esta dinámica se ligó al amplio espectro de alianzas tejido por el PT, visualizado en el reparto de ministerios y funciones, quedando las carteras económicas generalmente en manos de los sectores más conservadores y las áreas sociales en su ala progresista. En esta primera etapa se expresaron escasas modificaciones en las relaciones de fuerzas sociales, favorables al capital financiero, permaneciendo contraído el salario. Este escenario comenzó a modificarse parcialmente a partir del segundo gobierno de Lula y luego en el mandato de Dilma Rousseff, con el denominado giro neodesarrollista. En esta segunda etapa, a partir de la no renovación del acuerdo y pago de la deuda al FMI, se amplió la autonomía relativa estatal, adoptando, por un lado, medidas de estímulo fiscal a la producción industrial y

a las empresas públicas, con grandes planes de obra pública, y, por otro, una mejora importante en la distribución del ingreso, a través de políticas como el aumento del salario mínimo y la expansión de la Bolsa Familia, que incidieron en descenso de la pobreza y la desigualdad y la expansión de los sectores medios a partir de una mejora en los ingresos populares. Aun así, distintos trabajos señalan la continuidad de la dominación financiera en el bloque de poder junto a la burguesía industrial, lo cual tiene también su correlato en materia de política exterior e inserción internacional. En primer lugar, Brasil ha impulsado la consolidación de distintos espacios regionales, como el MERCOSUR y promovido la conformación de la UNASUR, como instancias regionales que sirvan para convalidar su liderazgo regional y constituir un mercado interno ampliado para la acumulación del capital brasileño. En este punto se visualiza una continuidad de estrategias «semiimperialistas» del capital brasileño hacia la región, profundizando su transnacionalización y penetración en los distintos espacios nacional latinoamericanos. Esto se relaciona con que el gobierno del PT ha abrazado la proyección de Brasil como potencia capitalista mundial, utilizando al espacio regional como base de fortalecimiento para ampliar su peso en los foros e instituciones internacionales, y proyectar junto a las potencias emergentes del BRICS, un nuevo orden multipolar. De este modo, vemos cómo se articulan las relaciones de fuerzas locales, las relaciones hegemónicas que involucran, con su proyección a nivel internacional. Y es en la complejidad propia de la estrategia del oficialismo, que busca ampliar también el desarrollo social, conteniendo, por su propia cultura política, en su interior un ala izquierda que busca impulsar (en condiciones minoritarias) la conformación de sujeto popular, que Brasil ha podido empalmar y defender procesos crecientemente radicalizados como el de Venezuela, cuyas proyecciones regionales se articulan, solapan y, en parte, difieren, pero cuyo acuerdo ha sido clave para la conformación del proceso de integración actual, formando parte de un mismo bloque regional que ha instituido un cambio de época a nivel continental.

En el caso de Venezuela, la proliferación de estrategias rupturistas producto de la potencia del proyecto chavista y la propia dinámica local del conflicto, llevó a la radicalización del mismo hasta el punto de encontrar en la superación sistémica del capitalismo el horizonte necesario para poder seguir avanzando en las conquistas sociales que fueron conformando al sujeto popular que se va empoderando en la Venezuela bolivariana. Algunos rasgos de esta genuina revolución ya se insinuaban, desde la primera etapa, en la Constitución de 1999: una propuesta de democracia participativa, profundizada en lo político institucional a través del impulso de consejos comunales y los referendos, con una

dimensión económico-social que se expande a partir del apoyo a experiencias de producción autogestivas y cogestivas. En este sentido, la gestión popular de procesos productivos y de asuntos públicos implica la apuesta por la construcción de una democracia integral, donde democracia y socialismo aparecen vinculados, y tienen su nudo en la construcción de poder popular. Este poder es estimulado a partir de políticas públicas, como las de reforma agraria y urbana y promoción del cooperativismo, donde la orientación a modificar las condiciones estructurales de las clases subalternas se articula con la modificación de las relaciones de fuerzas políticas en tanto se convocan a la autoorganización de los actores beneficiarios de las mismas para demandarlas y ponerlas en funcionamiento. Esta misma lógica de construcción de sujeto colectivo se manifiesta en las políticas sociales, en las «misiones», y en otras instancias que van englobando la gestión popular de las políticas y del territorio como en los consejos comunales. Así fue cobrando forma el socialismo del siglo XXI, definido como orientación estratégica del proceso bolivariano una vez que se hizo patente que no alcanzaba una articulación entre capital y trabajo de carácter nacionalista para sustentar el proyecto, y que la burguesía «nacional», a pesar de ser beneficiaria de varias políticas económicas en un comienzo, tendía a aliarse con la oposición golpista. Así, para avanzar en mayores conquistas sociales pareció necesario trascender el propio sistema de dominación y proyectar una sociedad alternativa que va cobrando forma a medida que se configura el sujeto popular colectivo y avanza a alterar todas las dimensiones de las relaciones de fuerzas. Es desde este trayecto donde puede comprenderse que Venezuela no sólo aporte a las instancias regionales del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, sino que también impulse un proyecto de integración socialista como el ALBA, donde la orientación económica no aparece escindida de su preocupación social, en tanto es concebido como un tratado de comercio de los pueblos, dirigido a su desarrollo integral. Es sólo desde esta referencia que puede entenderse, por ejemplo, el intercambio de petróleo venezolano por médicos cubanos o la priorización de la erradicación del analfabetismo como condición indispensable para la conformación de sujeto popular. Además, Venezuela proyecta su visión hacia la escala global, combinando diplomacia social con diplomacia petrolera, rearticulando a la OPEP y estrechando lazos con los países que desafían a Estados Unidos, buscando recrear un escenario multipolar a través del enfrentamiento al imperialismo norteamericano.

Finalmente, el caso de Argentina presenta sus propias particularidades. La Argentina kirchnerista tiene un doble preludeo en la crisis de 2001, con su levantamiento popular, y el gobierno de Duhalde que en 2002 estableció las

bases del neodesarrollismo argentino, pero cuyo costo de transición recargó sobre las espaldas de los trabajadores generando una masiva transferencia de recursos de estos al capital. El kirchnerismo se posiciona entonces como una construcción ambivalente, con un ala sistémica que procura el restablecimiento del orden mediante la conformación de un capitalismo «nacional», de carácter industrialista y con inclusión social, y un ala popular, que impulsa crecientes rupturas, atendiendo a los reclamos de 2001, promoviendo potentes políticas sociales y recuperando la política como herramienta de cambio social. Tras un primer período, entre 2003 y 2007, de ascenso hegemónico, donde el kirchnerismo pudo, desde la política pública, construir equilibrios inestables entre las distintas fracciones de clases dominantes y subalternas, arribamos a un punto de inflexión en 2008, con el conflicto agrario que infringió la primera derrota al oficialismo, que se prolongaría sobre las elecciones legislativas de 2009, en el marco de la crisis mundial. Pero desde esta coyuntura crítica, el kirchnerismo, bajo la presidencia de Cristina Fernández, impulsó una etapa de radicalización, donde proliferó el enfrentamiento con los sectores del capital que se iban apartando de la coalición oficialista y promovió un empoderamiento de los sectores populares a través de políticas redistributivas y conquista de derechos civiles, acompañados, asimismo, por una creciente intervención estatal en la economía, con mayores estatizaciones y la puesta en marcha de un plan anticrisis de corte neodesarrollista basado en el estímulo de la demanda a través de la expansión del gasto público y la transferencia de recursos hacia la industria y los trabajadores, buscando proteger el nivel de empleo y actividad económica. La ambivalencia del kirchnerismo parte de su propio proyecto de pacto social, entre trabajo y capital, ligado a su tradición peronista, pero que encuentra fuertes tensiones en las características actuales de la estructura de clases a nivel nacional. La confianza en que la burguesía nacional pueda llevar a un desarrollo soberano e inclusivo encuentra límites en las propias características del capital productivo, cuyos principales grupos en la cúpula empresaria se encuentran altamente extranjerizados y concentrados, orientados además al mercado externo, y, por otro lado, con un tejido de pymes, de capital nacional y ligadas al mercado interno, pero cuyas limitaciones de productividad y escala hacen que vean en el trabajo la principal variable de ajuste para garantizar su reproducción ampliada. Esta ambivalencia contradictoria también se expresa a escala internacional. Por un lado, Argentina aparece como el principal socio de Brasil, aunque posee una balanza comercial altamente deficitaria con este y la burguesía brasilera haya comprado importantes empresas argentinas, y ha tomado el proyecto de UNASUR como propio, imprimiéndole una gran dinámica

para defender a las democracias en la región y avanzar en la conformación de un bloque sudamericano. Por otro lado, Argentina ha sido un fuerte aliado de Venezuela, apoyando a los gobiernos bolivarianos contra las intenciones desestabilizadoras y golpistas de la oposición, estrechando vínculos comerciales y políticos, e impulsando su incorporación al MERCOSUR. Sin embargo, no ha acompañado a Venezuela en el ALBA; esto se debe al propio carácter del proyecto kirchnerista, cuya ala izquierda no ha conseguido hegemonizar ni conformar un sujeto popular consolidado de modo de impulsar su inclusión en dicho espacio y radicalizar el proceso argentino lo suficiente como para reinstalar el horizonte socialista (como ocurriera durante los años 70).

Para concluir, debemos remarcar la relevancia de este proceso de integración latinoamericana, que pretende dejar de ser el «patio trasero» de Estados Unidos, para constituirse en un actor relevante a nivel mundial, procurando el restablecimiento de la multipolaridad a partir de su unificación como bloque. Tanto Brasil como Argentina y Venezuela, venían formando parte de un mismo espacio progresista en la región, que logró derrotar la estrategia de subordinación norteamericana del ALCA, y procuró sostener los procesos de cambio al interior de la región, enfrentando los intentos golpistas (de forma exitosa, salvo en los casos de Honduras y Paraguay) y han dado bríos al proceso de unidad e integración más importante desde las gestas independentistas. A su vez, dentro del espacio progresista latinoamericano, se expresaron distintos subespacios ligados al distinto carácter de los proyectos hegemónicos, en su vinculación con el cambio en las relaciones de fuerzas entre las fracciones de clases y la constitución de sujetos colectivos. Observamos un subespacio configurado por los casos que impulsaron la conformación de alianzas policlasistas manteniendo la predominancia del capital (con diversos niveles de subordinación o empoderamiento de las clases subalternas) como los casos de Brasil y Argentina. En ellos se expresan modelos de acumulación con una impronta neodesarrollista, que volvieron a darle fuerza a la industria, confiando en la capacidad de las burguesías nacionales de dirigir el bloque de poder, buscando desde el Estado ampliar márgenes de autonomía relativa para garantizar procesos redistributivos de inclusión social, a través de la creación de empleos, aumento del salario mínimo y potentes políticas sociales, de modo de recomponer las condiciones de vidas de las clases subalternas devastadas por las décadas neoliberales. Por otra parte, observamos otro subespacio conducido por Venezuela, al cual se integran el conjunto de países que conforman el ALBA (como Bolivia y Ecuador, entre otros), reivindicando el legado de la experiencia cubana, a partir de la conformación de un bloque popular que logre alterar el conjunto de las

relaciones de fuerzas y proyectar nuevas formas de construcción del socialismo.

En la actualidad, debemos recalcar que este proceso enfrenta una revitalización de la estrategia norteamericana sobre la región en alianza con los sectores más concentrados del bloque de poder a nivel local, que vienen modificando las relaciones de fuerzas en todas las dimensiones. El triunfo de la coalición opositora en Argentina y las acciones tomadas durante los primeros meses por el gobierno de Macri marcan la proliferación de una estrategia de regresión neoliberal que apunta a desmontar en un brevísimo plazo las principales conquistas y mejoras conseguidas por los sectores populares en la última década, cobrando una forma de revancha clasista y conservadora, con persecución ideológica y criminalización de la protesta social. Asimismo, el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de fines de 2015 también marca la pauta del avance de la estrategia imperialista y sus socios locales amenazando con clausurar el proceso de avance popular e integración regional. En este sentido, hay que evidenciar la necesidad de mayores niveles de articulación política y económica de los bloques alternativos que fueron surgiendo y la necesidad de establecer rupturas más profundas de modo de erosionar las bases del poder del gran capital y poder fortalecer las bases de un poder alternativo, popular, que permita garantizar las conquistas alcanzadas y sobreponerse a la derrota coyuntural que los procesos posneoliberales están sufriendo en el presente.

Bibliografia

- Antía, Florencia y Provasi Lanzara, Arnaldo 2009 «Los Procesos de reforma previsional en Chile, Uruguay y Brasil: entre legados y transformaciones» en *Ponto de Vista Perspectivas sobre o Desenvolvimento* (Río de Janeiro) N°12. Disponible en <http://neic.iesp.uerj.br/pontodevista/pdf/Ponto_de_vista_01jan2010.pdf>.
- Barbosa, Nelson y Souza, José A.P. 2010 «A inflexão do Governo Lula: política econômica, crescimento e distribuição de renda» en Sader, E. y Garcia, M.A. (orgs.) *Brasil: entre o passado e o futuro* (São Paulo: Fundação Perseu Abramo/Editora Boitempo).
- Basualdo, Eduardo 2007 «Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía», Documento N°1, Maestría en Economía Política Argentina, Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Buenos Aires.
- Brieger, Pedro 2009 «La política exterior en la era Kirchner», Trabajo presentado en el seminario «Política externas dos governos progresistas do Cone Sul: convergencias e desafios», organizado por la Fundación Friedrich Ebert, São Paulo, 29-30 de setiembre.
- Campello, Daniela y Zucco, César 2008 «A esquerda em um país democrático, globalizado y desigual. Uma análise do Brasil de Lula» en Moreira, C.; Raus, D. y Gómez Leyton, J.C. (coords.) *La nueva política en América Latina. Rupturas y continuidades* (Montevideo: Trilce).
- Cano, Wilson y Gonçalves da Silva, Ana Lucia 2010 «Política industrial do governo Lula», IE/UNICAMP, Campinas, Texto para Discussão N° 181.
- Caraballo, Aida y Pastrana, Reinaldo 2010 «Las nacionalizaciones, expropiaciones y privatizaciones en Venezuela», Maestría en Ciencias Administrativas. Disponible en <<http://udogerencia.blogspot.com.ar/2010/11/las-nacionalizaciones-de-las-empresas.html>>.
- Coelho, Eurelino 2008 «Uma contribuição à crítica da política econômica do governo Lula», Reseña al libro *A economia política do Governo Lula*, de Filgueiras y Gonçalves, 2007. Disponible en <<http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/revista/20100316020535/20lula.pdf>>.
- Cooperativa Gestión Participativa 2009 «Resumen del Diagnóstico del Sector de la Economía Social y Solidaria en Venezuela». Disponible en <<http://gestionparticipativavenezuela.files.wordpress.com/2010/01/resumen-diagnostico-2008-gp-para-aci.pdf>>.
- Da Silva e Silva, Maria Ozanira 2007 «O Bolsa Família: problematizando questões centrais na política de transferência de renda no Brasil» en *Ciência & Saúde Coletiva* (Rio de Janeiro) Vol. 12, N° 6.

- Dias Carcanholo, Marcelo 2008 «Duas décadas de neoliberalismo no Brasil: a economia política da continuidade» en *Periferias* (Buenos Aires) N°16.
- García, Anahí 2009 «La política económica durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2008)» en *Revista de Ciencia Política* (Buenos Aires) N° 8.
- Gaudichaud, Franck 2010 «Balance de ocho años de gobierno Lula: ‘Un social liberalismo a la brasileña’», CETRI. Disponible en <<http://www.cetri.be/spip.php?article1828&lang=es>>.
- Gonçalves, Reinaldo 2011 «Governo Lula e o nacional-desenvolvimentismo às avessas» en *Economistas*, Año 2, N° 6, COFECON.
- Gramsci, Antonio 2008 *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Gramsci, Antonio 2003 *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Lander, Edgardo 2007 «El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela» en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, N° 22, septiembre.
- López Maya, Margarita 2004 «Democracia participativa y políticas sociales en el gobierno de Hugo Chávez Frías» en *Revista Venezolana de Gerencia*, Vol. 9, N° 28.
- Marx, Karl 2007 (1885) *El Capital* (México DF: Siglo XXI) Tomo II, Biblioteca de pensamiento socialista.
- Monedero, Juan Carlos 2009 «Economía social en Venezuela: entre la voluntad y la posibilidad» en *Otra Economía*, Vol. III, N° 5. Disponible en <www.riless.org/otraeconomia>.
- Morais, Lecio y Saad-Filho, Alfredo 2011 «Da economia política à política econômica: o novo-desenvolvimentismo e o Governo Lula» en *Revista de Economia Política*, Vol. 31, N° 4.
- Morales Fajardo, María Esther 2013 «Liderazgos latinoamericanos: ALBA-TCP y UNASUR como opciones de la integración regional» en *CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política* (México DF: UNAM) N°17.
- Poulantzas, Nicos 1981 (1976) *Las clases sociales en el capitalismo actual* (México DF: Siglo XXI Editores).
- Rocha, Geisa M. 2013 «El balance social de los años de Lula» en *Brasil Explorador* (Buenos Aires: Le Monde diplomatique) N° 2.
- Rodríguez Rojas, Pedro 2010 «Venezuela: del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI» en *Política y Cultura* (México DF: UAM) N° 31.
- Schorr, Martín 2012 «Argentina: ¿nuevo modelo o viento de cola? Una caracterización en clave comparativa» en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires) N° 237.

Schutte, Giorgio Romano 2013 «Brasil: nuevo desarrollismo y petróleo de aguas profundas» en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires) N° 244.

Simonoff, Alejandro 2008 «La política exterior de los gobiernos kirchneristas y la tercera posición» en *Intellector* (Rio de Janeiro) Año IV, Vol. V, N° 9.

Tavosnanska, Andrés y Herrera, Germán 2009 «La industria argentina a comienzos del siglo XXI. Aportes para una revisión de la experiencia reciente» en Müller, Alberto (coord.) *Industria, desarrollo, historia. Ensayos en homenaje a Jorge Schvarzer* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas-UBA).

Tomé, Juan Pablo y Sánchez Iglesias, Eduardo 2010 «Política económica en Venezuela: propósitos, medidas y resultados obtenidos en la última década», Ponencia en XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela.

Torrado, Susana 1992 *Estructura social de la Argentina: 1945-1983* (Buenos Aires: Ediciones de la flor).

Varesi, Gastón 2011 «Argentina 2002-2011: neodesarrollismo y radicalización progresiva» en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 264.

Varesi, Gastón 2010 «El circuito productivo sojero argentino en el modelo posconvertibilidad. Una aproximación desde el enfoque de análisis regional» en *Cuadernos del CENDES* (Caracas: UCV) N° 74.

Zelicovich, Julieta 2011 «El lugar del MERCOSUR en la política exterior argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner» en *Relaciones Internacionales* (La Plata) N° 41.

Zibechi, Raúl 2007 «Políticas económicas. Lula y Chávez, dos giras, dos caminos». Disponible en < www.voltairenet.org >.

Zibechi, Raúl 2005 «Movimiento Sin Tierra de Brasil. La reconstrucción de la dignidad humana». Disponible en < www.voltairenet.org >.